

# La coyuntura política después de la ofensiva

Carlos Losada

Resumen

*Al tomar el poder ARENA y ser desplazado el Partido Demócrata Cristiano empezó a desvanecerse el juego de las apariencias democráticas. Empezó entonces un acelerado proceso de polarización que culminó en la ofensiva de noviembre y en la brutal reacción contrainsurgente de la Fuerza Armada. En un mes, el país retrocedió casi una década en términos de cierre de espacios políticos y de persecución sistemática contra toda manifestación ideológica que no fuera expresión del anticomunismo visceral de quienes están en el poder político y militar.*

## 1. Introducción

A partir de marzo de 1989, cuando ARENA ganó las elecciones presidenciales y, sobre todo, a partir de junio, cuando asumió formalmente el poder ejecutivo, en El Salvador empezó una vertiginosa polarización entre el proyecto contrainsurgente y el proyecto revolucionario. La razón primera —no necesariamente la primaria— de tal situación es simple. Anteriormente, mientras la democracia cristiana estuvo en el poder, los polos de la confrontación no parecían tan claros. La manipulación propagandística de los recursos ideológicos del Estado permitió al Partido Demócrata Cristiano presentarse como un “centro democrático” entre dos extremas, aunque, de hecho, compartiera con la derecha su común rechazo al proyecto revolucionario. Sin embargo, una vez que ARENA tomó el poder, y que el Partido Demócrata Cristiano fue desplazado del

escenario político empezó a desvanecerse ese juego de apariencias.

## 2. Cierre de los espacios políticos

Además del saldo irreparable de víctimas humanas, una de las secuelas más dramáticas de la coyuntura socio-política que se ha generado en los últimos dos meses de 1989 ha sido la desarticulación de los espacios sociales y políticos que los sectores democráticos del país habían conquistado a lo largo de una década de penosos esfuerzos, abonados por un río de sangre. La masacre de la UCA es el caso paradigmático de tal situación, pero no fue un hecho aislado. La ofensiva del FMLN sirvió de pretexto para que el ala dura del ejército intentara pasar a cuchillo a toda la oposición en bloque, sin mayores distinguos. Ese propósito ha contado, factualmente, con el apoyo institucional de una vasta su-

perestructura jurídica y política, implantada *ad hoc* para llevar adelante la lucha "anti-terrorista."

Durante el período comprendido entre el 11 de noviembre y el 15 de diciembre, el ejército capturó a 49 trabajadores de las iglesias y realizó 61 cateos en 47 templos, clínicas parroquiales e instalaciones eclesiásticas y de ayuda humanitaria.<sup>1</sup> Durante el mismo período, el movimiento laboral denunció 8 asesinatos, 2 desapariciones y 76 capturados afiliados a 41 organizaciones sindicales.

La persecución contra los partidos políticos de oposición fue también intensa. Los dirigentes del Movimiento Nacional Revolucionario, Guillermo Ungo y Héctor Oquellí, debieron asilarse en la embajada de Venezuela. Rubén Zamora buscó resguardo temporal en la de México. La residencia de Ungo fue cateada sucesivamente por la Policía Nacional, la Primera Brigada de Infantería y la Guardia Nacional. El 6 de diciembre fue capturado en el aeropuerto, cuando retornaba de México, el dirigente del Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), Ing. Jorge Villacorta, quien fue liberado horas después, tras haber sido golpeado en la Policía Nacional y amenazado de muerte para que abandonara definitivamente el país. Ni siquiera el Partido Demócrata Cristiano se vio libre de hostigamientos de parte del ejército. El 8 de diciembre, efectivos de la Primera Brigada de Infantería catearon la residencia del Dr. Eduardo Colindres, a quien habrían intentado capturar.

Hay una homología formal entre las condiciones políticas imperantes a comienzos de la década de 1980 y la coyuntura que se ha generado tras la ofensiva de noviembre. En marzo de 1980, la Junta Revolucionaria de Gobierno, a través del Decreto N° 155, implantó el estado de sitio, el cual se prolongó durante siete años. El 12 de noviembre recién pasado, al día siguiente de iniciarse la ofensiva, el consejo de ministros decretó también estado de sitio. El 22 de marzo de 1980, la junta promulgó los decretos 264 y 265, mediante los cuales reformó los códigos Penal y Procesal Penal para ampliar el espectro de actos catalogados como "terrorismo." Dos días después de haber promulgado ambos decretos, fue ase-

sinado Monseñor Romero. El 3 de diciembre del mismo año, la junta promulgó el Decreto N° 507, el cual ofreció a los cuerpos de seguridad un cheque en blanco para proceder en su lucha contra la "subversión del orden público." Una semana antes, la dirigencia del Frente Democrático Revolucionario había sido capturada, torturada y asesinada. El 24 de noviembre pasado, la asamblea legislativa, controlada por ARENA, aprovechó el desconcierto social y político generado por la ofensiva del FMLN, para aprobar nuevas reformas a los códigos Penal y Procesal Penal en la parte relativa a los actos de "terrorismo." En enero de 1981, la junta decretó el toque de queda, el cual se prolongó durante casi todo el año. El 12 de noviembre pasado, el gobierno de Cristiani decretó también el toque de queda.

El toque de queda fue levantado a comienzos de febrero, pero la Fuerza Armada y la fracción legislativa de ARENA estiman que aún persisten las condiciones que hacen necesario el estado de sitio. Formalmente, no es ésta una medida novedosa en El Salvador. El país vivió bajo estado de sitio desde marzo de 1980 hasta comienzos de 1987. Empero, a partir de junio de 1984, cuando el Partido Demócrata Cristiano asumió el control formal del poder ejecutivo, la prórroga mensual del estado de sitio se convirtió en un ritual legislativo y la medida adquirió una vigencia puramente nominal. De hecho, se fueron abriendo los espacios políticos y los medios de comunicación empezaron a hacer un uso relativamente efectivo de la libertad de expresión. No es ésta la situación actual del estado de sitio. A raíz de la ofensiva de noviembre, el estado de sitio ha sido instrumentalizado por el gobierno de manera análoga a como funcionó a comienzos de la década, como un recurso legal para coartar efectivamente toda disensión.

El bloqueo informativo gubernamental, sobre todo en los primeros días de la ofensiva, fue grotesco.<sup>2</sup> Todos los medios de comunicación fueron sometidos a una drástica censura, bajo el control del Centro de Información Nacional (CIN), el cual funcionó como fachada civil del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA). Si bien, después, el rigor de la censura

## El estado de sitio ha sido instrumentalizado por el gobierno como un recurso legal para coartar efectivamente toda disensión.

gubernamental ha disminuido paulatinamente y se han dado algunos pasos a favor del restablecimiento de la libertad de prensa y de ciertas libertades políticas, de hecho, subsiste un clima de considerable autocensura.

La atmósfera persecutoria imperante, en algunos casos velada, en otros desembozada, ha obligado a todos los sectores democráticos del país al trabajo semiclandestino o al autoexilio. Si en 1980 fueron asesinados Monseñor Romero y los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, ahora han sido masacrados los jesuitas de la UCA y han sido perseguidos los dirigentes de la Convergencia Democrática. A la vista de esta recurrencia de situaciones en el curso de una década, los admiradores de Mircea Eliade estarían tentados a interpretarla como un "eterno retorno" de ciclo corto.

### 3. La posición del FMLN

#### 3.1. Los preparativos de la ofensiva

Obviamente, el FMLN venía preparando la ofensiva desde muchos meses atrás. De hecho, su comandancia general debió de haber estado trabajando seriamente en el proyecto insurreccional durante todo el segundo semestre de 1988, hasta acercarse la coyuntura electoral de marzo de 1989. En agosto de 1988, la Convergencia Democrática anunció su decisión de participar en dicho evento. En enero siguiente, Reagan transfirió el poder a Bush, quien parecía una figura más pragmática y ponderada, a pesar de haberlo acompañado durante ocho años como vicepresidente. El FMLN aprovechó ese momento para lanzar su célebre propuesta de posposición de las elecciones, la cual encontró un amplio eco en diversas fuerzas sociales y políticas.<sup>3</sup> A tenor de su propuesta, el FMLN se manifestaba dispuesto a convertirse eventualmente en partido político y a participar en las elecciones si se cumplían ciertas condiciones mínimas que garantizaran un juego efectivamente democrático. Sin embargo, no por ello desechó la idea de la insurrección como una

opción alternativa.

A comienzos de febrero de 1989, la revista *Pensamiento Propio* preguntó al comandante Joaquín Villalobos si el FMLN consideraba que ya estaban maduras las condiciones para una insurrección en El Salvador. Villalobos respondió que "en todo el país ya está en marcha un proceso de insurrección campesina. En las ciudades la consigna del FMLN es que las masas asuman un papel protagónico en el cambio; es decir, hay ánimo insurreccional."<sup>4</sup> En su artículo "Perspectivas de victoria y proyecto revolucionario," aparecido en la edición de *ECA* de enero-febrero de 1989, Villalobos afirmaba la misma tesis: "en El Salvador existe ya un proceso de insurrección permanente de las masas campesinas, el cual, en el último año, se ha acrecentado y extendido a casi todo el país... Es bastante evidente que el FMLN ha desplegado nexos con nuevos contingentes de masa en áreas vitales cercanas a las ciudades y dentro de las mismas ciudades... es muy difícil contener el proceso insurreccional que ya se encuentra en marcha en El Salvador."<sup>5</sup>

Villalobos caracterizaba aquel momento como una "coyuntura de definición en la cual las alternativas van desde la toma del poder hasta el paso hacia una nueva situación y a una mejoría sustancial en nuestra acumulación de fuerzas. Tenemos una resolución ofensiva aunque no hablamos de fechas ni pensamos en un desenvolvimiento mecánico de los acontecimientos."<sup>6</sup> El proceso insurreccional estaba en marcha, aunque el FMLN consideraba que no se le podía poner plazos: "dadas las particularidades de la guerra y su complejidad no se puede restringir el concepto de ofensiva a una fecha, ya que los factores que se conjugarán serán el resultado de una lucha social cuyo curso marcha hacia una insurrección popular. Esa insurrección será el resultado de múltiples factores tales como la ofensiva militar del FMLN, el proceso insurreccional de las masas en la ciudad y en el campo, la generalización de la represión, la descomposición política del gobierno y de las fuerzas



armadas, y el debilitamiento de la política de Estados Unidos y de sus instrumentos en El Salvador. Estos factores y otros más se encuentran en marcha."<sup>7</sup> "se están conjugando una gran cantidad de factores como el fracaso de la política de Ronald Reagan en la región y, en lo interno, una descomposición del bloque de poder (que la muerte de Napoleón Duarte simbólicamente sintetiza), un auge del movimiento de masas, que es el factor clave del desequilibrio, y un ascenso militar del FMLN, que busca agudizar esa descomposición y activar las masas en un sentido insurreccional."<sup>8</sup>

Tras el fracaso, en las discusiones de Oaxtepec, de la iniciativa de posposición de las elecciones, el proyecto insurreccional cobró nuevas posibilidades. En una larga entrevista concedida a Marta Harnecker el 25 de febrero de 1989, el comandante Joaquín Villalobos afirmaba: "la alternativa insurreccional se mantiene como una segunda alternativa... sigue teniendo validez la consigna de prepararse para la insurrección."<sup>9</sup> Villalobos estaba convencido de que "en las condiciones electorales actuales la Convergencia no va a ganar, no puede proponerse sacar una gran cantidad de votos."<sup>10</sup>

El FMLN mantuvo el proyecto de la insurrección como una opción alternativa a lo largo de todo el semestre que siguió a las elecciones. En septiembre de 1989 se inauguró una importante fase del proceso de diálogo. A diferencia de los encuentros anteriores, esta vez el interlocutor del FMLN fue el gobierno de ARENA. No obstante, el FMLN no descartó la alternativa insurreccional; sin duda, acudió a las reuniones de diálogo de México y Costa Rica mientras proseguía los preparativos para una eventual maniobra militar de envergadura. Ello no implica necesariamente que el FMLN no estuviera dispuesto a dialogar o que hubiera ocultado sus verdaderas intenciones durante el diálogo. El FMLN siempre colocó la carta militar sobre la mesa de conversaciones. En el momento en que la vía de la negociación fracasó, la insurrección pasó al primer plano en su horizonte estratégico. Sería temerario, por tanto, acusar al FMLN de "mala fe" al acudir al diálogo; quizá, en todo caso, lo que habría que discutir es si la presión militar que intentó ejercer a través de la ofensiva de noviembre fue el modo más apropiado para impulsar la solución política del conflicto.

No ha quedado del todo claro si el FMLN



esperaba, efectivamente, que la ofensiva de noviembre encendiera la mecha de la insurrección. Al menos en febrero de 1989, Villalobos afirmaba que "el FMLN no está planteando que las masas estén al borde de la insurrección y dispuestas ya a lanzarse al asalto del poder;"<sup>11</sup> y parecía consciente de que "la radicalización de las masas no se da de la noche a la mañana."<sup>12</sup> Lo más probable es que el FMLN lanzara su ofensiva contando con la carta insurreccional, pero sin cifrar su apuesta enteramente en ella.

Parece claro, en cambio, que el FMLN sobreevalora el respaldo popular con que cuenta su proyecto político en la actualidad. En enero de 1989, Villalobos aseguraba que "el FMLN tiene ya en sus manos la pieza decisiva: las masas, a las cuales utilizará para dar el jaque mate."<sup>13</sup> Convendría investigar si esta apreciación tiene algún fundamento *in re*.

Lo primero que habría que decir es que una fuerza política difícilmente puede sobrellevar diez años de guerra sin desgastarse, sobre todo cuando debe combatir en circunstancias tan desventajosas como las que ha arrastrado el FMLN. El FMLN contó, a comienzos de la década de 1980, con el respaldo de un poderoso frente de masas. No es ocioso preguntarse qué ha pasado con ese movimiento de masas al cabo de diez años.

En aquel momento, el FMLN vertebró su proyecto político-militar sobre dicho movimiento de masas, con lo cual organizó un poderoso ejército revolucionario pero al enorme costo de descuidar su frente político. Desde entonces, el movimiento revolucionario ha perdido miles de cuadros y simpatizantes. Hay fundadas razones para suponer que la mayoría de las 70 mil víctimas mortales del conflicto, caídas durante la década pasada, militaban o por lo menos simpatizaban con la insurgencia. Varios miles de simpatizantes de la revolución han emigrado al exterior. Otros, quizá los menos, han logrado incluso instalarse en una cómoda existencia burguesa; por lo tanto, probablemente, los ideales por los que hace diez años salieron a la calle a manifestarse ya no les inspiran demasiado entusiasmo. Otros muchos tal vez no están desencantados de la revolución, pero tampoco están

dispuestos a comprometerse con ella después de haber visto a parientes y amigos sucumbir ante la ferocidad represiva del ejército y de los cuerpos de seguridad.

El *factum* fundamental es que la base social del proyecto insurgente ha sufrido un profundo desgaste durante la década que recién finaliza. Desde luego, no negamos que el movimiento revolucionario no haya sido capaz de renovar sus cuadros o incluso de reconstituir un cierto frente de masas, sobre todo a partir de 1986, pero ello no ha sido suficiente para inclinar a su favor la correlación de fuerzas entre su proyecto y el de la contrainsurgencia. En términos relativos, actualmente, el movimiento revolucionario está en mayor desventaja frente al proyecto contrainsurgente que lo que estuvo a comienzos de la década.

Comprensiblemente, el FMLN no comparte este punto de vista. En la entrevista concedida a Marta Hamecker, el comandante Villalobos aseguraba: "no nos queda la más mínima duda de que, bajo las condiciones planteadas por nosotros en la propuesta electoral que se dio a conocer a fines de enero, nosotros logramos ganar las elecciones porque somos, de hecho, la fuerza mayoritaria en el país... Nosotros no dudamos que si se realiza una contienda electoral limpia, las masas buscarán votar por quien represente un cambio a esta crítica situación y el ideal de cambio no puede representarlo ARENA, sino, indiscutiblemente, las fuerzas agrupadas alrededor de la izquierda democrático-revolucionaria... Te repito que, según nuestro análisis de la correlación de fuerzas y bajo condiciones de limpieza, nosotros tenemos la plena seguridad de que obtendríamos una victoria electoral aplastante... (Nosotros apostamos) a que somos mayoría. Tenemos una fe absoluta en el pueblo. Los diez años de guerra nos han dado un enorme prestigio entre las masas. Y éstas saben que nosotros sí seríamos capaces de hacer un cambio en el país, no demagogia, sino un cambio real."<sup>14</sup> Más adelante, Villalobos añadía: "lo que ha impedido que durante todos estos años se exprese más claramente el inmenso apoyo de las masas al movimiento revolucionario es, de hecho, el terror creado por el genocidio. No tenemos ninguna duda de que bajo

otras condiciones este apoyo se expresaría abrumadoramente... En este sentido consideramos que en El Salvador la batalla ideológica es ya una batalla ganada."<sup>15</sup> Estas valoraciones fueron formuladas antes del triunfo de Cristiani en marzo de 1989 y, por supuesto, antes de la derrota del Frente Sandinista en las elecciones del 25 de febrero recién pasado. ¿Las reafirmaría tan categóricamente Villalobos después de que ARENA ha ganado la presidencia en El Salvador y el sandinismo ha perdido las elecciones en Nicaragua? Parece claro que el FMLN, como lo afirma Villalobos, ha sido "el organizador de masas más importante que ha habido en El Salvador."<sup>16</sup> Lo discutible es si sigue siéndolo en la actualidad.

### 3.2. ¿Cuál es el arrastre popular del FMLN?

En marzo de 1989, mientras Villalobos defendía las posibilidades de la insurrección, el P. Ellacuría afirmaba, en cambio, que el "extremismo revolucionario" había dejado de ser una posibilidad histórica y que el pueblo salvadoreño no estaba dispuesto a una aventura insurreccional: "no es realista sostener que más de un diez por ciento de la población esté decidido a entrar activamente en el campo de la lucha armada y de la insurrección."<sup>17</sup> En las elecciones presidenciales llevadas a cabo pocos días después, la Convergencia Democrática, a la cual el electorado percibió en general como un frente electoral del FMLN, obtuvo apenas el 3.8 por ciento de los votos válidos. La realidad parecía dar la razón a Ellacuría.

Desde luego, las circunstancias para el desempeño electoral de la Convergencia Democrática en aquella ocasión no eran óptimas, ni mucho menos. La coalición socialdemócrata debió superar un cúmulo de factores adversos de diferente índole.<sup>18</sup> Paradójicamente, junto a los efectos de la represión e intimidación del ejército contra sus cuadros y simpatizantes, la Convergencia Democrática sufrió también el impacto del boicot electoral decretado por el FMLN. Las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) habían indicado que la Convergencia podía llegar a obtener un 6 por ciento

de los votos. Su ventaja sobre el Partido de Conciliación Nacional (PCN) era bastante holgada. Sin embargo, no alcanzó ni siquiera el 4 por ciento. Aun admitiendo que el Consejo Central de Elecciones (CCE) manipuló los resultados para otorgar el tercer lugar al PCN, se trató de un pobre desempeño electoral para una fuerza política que en algún momento de la campaña llegó a manejar la idea de disputar el segundo puesto. Aparentemente, la Convergencia Democrática recogió gran parte del repudio popular contra la brutal campaña de sabotaje a la energía impulsada por el FMLN en los días del evento electoral. En tal sentido, sus magros resultados en dichas elecciones pueden considerarse como un indicador indirecto de las posibilidades electorales del FMLN si fuera a elecciones en este momento.

No discutimos aquí si el proyecto revolucionario tiene más capacidad que otros proyectos políticos para satisfacer las necesidades objetivas del pueblo salvadoreño. Tal cuestión puede ser discutida en otro momento. Por ahora nos interesa más bien examinar cuál es la percepción del pueblo salvadoreño al respecto; esto es, si efectivamente la mayoría de los salvadoreños piensa que el FMLN recoge sus aspiraciones y necesidades mejor que lo que lo hacen otros proyectos políticos. Hay algunos indicadores que muestran que el FMLN no se da cuenta cabal de lo que piensa la generalidad de los salvadoreños. Las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), por ejemplo, han indicado que alrededor del 85 por ciento de la población está en desacuerdo con la estrategia de sabotaje del FMLN a la economía, porque ésta afecta principalmente a los más pobres.<sup>19</sup> A pesar de ello, el sabotaje ha seguido constituyendo un componente fundamental de la estrategia de guerra del FMLN.

Aún más significativa es la percepción que los encuestados manifiestan sobre el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos en el país. Según una encuesta corrida por el IUDOP en agosto de 1988, con ocasión del Debate Nacional por la Paz, el 22.5 por ciento de los encuestados consideraba que el FMLN era el principal violador de los derechos humanos,



**Lo que habría que discutir es si la presión militar que el FMLN intentó ejercer a través de la ofensiva de noviembre fue el modo más apropiado para impulsar la solución política del conflicto.**

mientras que un 10.8 por ciento consideraba que era el ejército. Esta percepción era más acusada en los estratos sociales de peor condición económica: en los estratos rurales, el 23.9 por ciento consideraba al FMLN como el principal violador, y sólo un 7.7 por ciento a la Fuerza Armada. En los estratos marginales, los porcentajes eran 23 y 9.9, respectivamente.<sup>20</sup> Por otra parte, a finales de 1988, el 78.4 por ciento de los salvadoreños consideraba que la actuación de la Fuerza Armada era entre regular y muy buena, mientras que sólo un 11.2 por ciento calificaba la del FMLN en los mismos términos.<sup>21</sup> ¿Qué posibilidades tendría el FMLN al ir a elecciones si el nivel promedio de conciencia del pueblo salvadoreño manifiesta este tipo de percepciones y valoraciones?

Además de los estereotipos difundidos por la propaganda contrainsurgente y de las dificultades intrínsecas a todo proceso de concientización colectiva, el propio FMLN ha cometido errores políticos de consideración que han dado más pábulo a tales estereotipos. En septiembre pasado, con ocasión de la reunión de diálogo entre el gobierno y el FMLN realizada en México, el propio comandante Villalobos reconoció, por primera vez desde que el ERP asesinó a Roque Dalton en 1975, que dicho crimen fue un grave error histórico, e incluso admitió que él había tomado parte en la "decisión colectiva" del asesinato.<sup>22</sup> En la misma ocasión, Villalobos admitió que el FMLN cometió otro error histórico al no aprovechar inteligentemente la coyuntura creada por el golpe militar del 15 de octubre de 1979 para forjar una alianza democrática con otras fuerzas que en aquel momento rechazó como "reformistas."<sup>23</sup> Posiblemente, el FMLN también erró al rechazar la oferta de negociación de Carter a comienzos de 1981, poco antes de la ofensiva del 10 de enero.

En tiempos más recientes, el FMLN ha seguido cometiendo errores graves. Entre ellos están la campaña contra los alcaldes, particularmente fuerte entre 1985 y 1987; la táctica de los

coches-bombas, iniciada en marzo de 1988; las contradicciones en que incurrió con la Convergencia Democrática al boicotear las elecciones presidenciales de marzo de 1989; la serie de asesinatos de figuras políticas de derecha a lo largo del último año, etc. En algunos casos, sus mecanismos de autocrítica parecen haberlo llevado a recapacitar sobre la eficacia de ciertas tácticas y procedimientos. Por ejemplo, en mayo de 1989 admitió que los coches-bomba estaban causando más perjuicio entre la población civil que beneficios militares, y suspendió su uso, pero reincidió en dicha táctica en octubre pasado.

En enero de 1989, Villalobos afirmaba que "el FMLN no es terrorista... no lleva a cabo acciones que busquen intencional y premeditadamente víctimas civiles, cosa que sí hace el ejército asesorado por Estados Unidos al bombardear y masacrar a miles de personas para exterminar y aterrorizar la base social de la guerrilla."<sup>24</sup> Sin embargo, la mayoría de los procedimientos y tácticas arriba enunciados difícilmente puede calificarse sino como terrorismo.

Los asesinatos de personalidades de la derecha son particularmente graves. El FMLN sólo se ha responsabilizado de algunos de ellos, pero hay razones fundadas para suponer que sus unidades han perpetrado la mayoría de dichos crímenes, si es que no todos. Los casos del Dr. Peccorini, del Dr. García Alvarado y del Dr. Francisco José Guerrero son ilustrativos. En los dos primeros casos, el FMLN guardó silencio inicialmente. En el caso del fiscal, unas autodenominadas "Fuerzas Gerardo Barrios" se reivindicaron el hecho. Meses después, las FAL admitieron que sus comandos habían perpetrado ambos crímenes. En el caso del Dr. Guerrero, incluso, voceros insurgentes desmintieron, desde Costa Rica, la responsabilidad del FMLN en el crimen. Semanas después, la comandante Ana Guadalupe Martínez acabó admitiendo que el FMLN había sido el responsable de dicho asesinato y que se había cometido otro error.<sup>25</sup>

No es necesario suponer que los comandos que ejecutaron estos asesinatos hayan recibido órdenes directas de la comandancia general para achacar a ésta una condescendencia culpable. Siendo la instancia superior del FMLN, la comandancia general es responsable última de lo que hagan sus comandos, sobre todo si, como parece ser el caso, no ha sancionado drásticamente a sus subordinados que han incurrido en prácticas de terrorismo. Apelar a la relativa autonomía que exige la compartimentalización del trabajo clandestino no es razón suficiente para eximirse de tal responsabilidad. En el fondo, esta actitud es análoga a la connivencia de la Fuerza Armada al encubrir a sus criminales.

#### 4. La posición de la Fuerza Armada

##### 4.1. La tradición antidemocrática del ejército

En principio, la Fuerza Armada parece decidida a resolver militarmente el problema de la guerra. Los debates internos en el ejército en torno a la eficacia de la estrategia de conflicto de baja intensidad son, en última instancia, variaciones sobre un mismo tema. La Fuerza Armada también está dividida por conflictos internos de poder y por pugnas intergeneracionales entre las tandas, pero el estamento militar, en su conjunto, tiene claro que el enemigo común a vencer es el FMLN. Frente a la amenaza del FMLN, la Fuerza Armada presenta una unidad monolítica. Este es otro punto en el cual el FMLN yerra en su análisis.

Según el comandante Villalobos, el FMLN asume que existe una "tradición de rebelión de las corrientes patrióticas en el ejército" y que ello abre "una posibilidad de encuentro real"<sup>26</sup> entre el FMLN y la Fuerza Armada: "dentro del ejército salvadoreño siempre ha cobrado cuerpo una tendencia histórica bajo formas patrióticas, nacionalistas, constitucionalistas e incluso revolucionarias con sus propias particularidades."<sup>27</sup> Según Villalobos, esa "tradición de rebelión" castrense es producto de la composición social del ejército "pues no está integrado por oligarcas ni por norteamericanos."<sup>28</sup> Más aún, Villalobos

piensa que el "proceso de división" que se da en el ejército "se convertirá en un componente estratégico del proceso insurreccional."<sup>29</sup>

Estas apreciaciones son fruto de una mala aplicación del análisis marxista de las clases sociales a la estructura jerárquica de la Fuerza Armada. La suposición del comandante Villalobos de que dentro del ejército habría una corriente de oficiales democráticos quienes, eventualmente, podrían incorporarse al proceso de negociación con el FMLN y aceptar sus demandas fundamentales es errónea. Las contradicciones secundarias intra-castrenses son importantes, pero no llegan al punto de mediatizar la contradicción primaria entre la Fuerza Armada y el FMLN. Además del intenso proceso de ideologización anticomunista a que la institución somete a sus integrantes, la Fuerza Armada ha aprovechado la situación de guerra para medrar económicamente por medio de una estructura de prebendas de diversa índole que hace muy difícil la disidencia de cualquier fracción dispuesta a dialogar en serio con el FMLN.<sup>30</sup>

El P. Ellacuría, quien a principios de 1989 había empezado a hablar de una "nueva fase" del proceso salvadoreño, caracterizada por una relativa flexibilización de posiciones por parte de los principales agentes comprometidos en el conflicto, opinaba, sin embargo, que el ejército no había entrado todavía con paso muy seguro por la senda de la democratización. Según Ellacuría, la Fuerza Armada "ha avanzado en una mayor profesionalización y en la aceptación de lo que se hace vender como democracia (elecciones) y cierto respeto en público a las decisiones del poder civil, siempre que no pongan en gran peligro sus intereses y, o privilegios," pero "no ha avanzado tanto en el respeto de los derechos humanos, de cuyas violaciones sigue siendo la principal responsable, entre otras razones porque no permite el enjuiciamiento de los miembros culpables, si éstos tienen cierto rango, a no ser que Estados Unidos se lo exija de modo terminante."<sup>31</sup> La masacre de la UCA, en la cual él mismo fue asesinado, constituye una dramática confirmación de sus apreciaciones. Ellacuría siempre insistió en que "no habrá democracia sin la democratización de la



#### 4.2. La masacre de la UCA: expresión de un "modus operandi"

Diversos sectores —el gobierno y la propia Fuerza Armada a la cabeza— han querido interpretar la masacre de la UCA como una acción aislada, producto de la iniciativa de unos cuantos elementos del ejército, quienes actuaron por su cuenta, al margen de las directrices institucionales. Esa interpretación encierra una tosca mixtificación.

La prensa norteamericana ha revelado recientemente que en la noche del miércoles 15 de noviembre hubo una importante reunión del Alto Mando castrense para discutir la adopción de medidas extraordinarias para frenar la ofensiva del FMLN.<sup>33</sup> En esa reunión estuvo presente Benavides. La masacre de los jesuitas ocurrió unas tres horas después de concluir la reunión. A la mañana siguiente hubo otra reunión de oficiales en las instalaciones del departamento nacional de inteligencia del ejército. Los oficiales aplaudieron cuando uno de ellos interrumpió la reunión para anunciar que Ellacuría había sido eliminado. Hasta la fecha, el Alto Mando no ha explicado satisfactoriamente los propósitos de ambas reuniones. La Fuerza Armada se ha limitado a negar que hubiese habido alguna conexión entre ellas y el asesinato de los jesuitas. No obstante, aun admitiendo que el coronel Benavides no actuó como intermediario de otras instancias del ejército al ordenar la masacre, subsiste el hecho de que la UCA siempre fue el blanco de una campaña institucional de desprestigio y agresiones por parte de la Fuerza Armada.<sup>34</sup> Si no hubiera habido esa animadversión institucional del ejército contra la UCA, la masacre de los jesuitas probablemente no hubiera ocurrido.

Existen también varios indicios que sugieren que, aun cuando no haya habido responsabilidad *a priori* de la Fuerza Armada en la masacre, la institución se ha convertido *a posteriori* en corresponsable de la iniciativa del coronel Benavides. El primer indicio se refiere a la tardanza con que el presidente Cristiani reveló los resultados de las pesquisas efectuadas por la co-

misión investigadora. Todavía el 2 de enero, al reunirse con el congresista Joe Moakley en Washington, el embajador William Walker le indicó que no había ninguna evidencia que implicara a ningún individuo o grupo en la masacre. Walker incluso defendió ante Moakley la posibilidad de que los jesuitas hubiesen sido asesinados por guerrilleros vestidos con uniformes del ejército. Mientras, ese mismo día, en San Salvador, un asesor militar norteamericano informaba a sus superiores que había tenido noticia de la participación de oficiales salvadoreños en la



masacre. El asesor habría obtenido la información, a comienzos de diciembre, del coronel Carlos Armando Avilés, jefe del departamento de operaciones psicológicas de la Fuerza Armada. A su vez, el 5 de enero, el coronel Milton Menjívar, responsable del grupo de asesores norteamericanos, comunicó la información al jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, aun antes de informar al embajador Walker.

Una vez que Estados Unidos estuvo en posesión de la información, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. La Fuerza Armada no pudo ocultar por más tiempo la participación de Benavides y de los efectivos del batallón Atlacatl en la masacre. El 6 de enero, el presidente Cristiani admitió públicamente que elementos del ejército estaban implicados, aunque los nombres de los imputados los anunció una semana después, el 13 de enero. El coronel Avilés fue arrestado.<sup>35</sup>

La prensa norteamericana maneja la hipótesis de que la Fuerza Armada conocía la participación del coronel Benavides en la masacre y buscaba la manera de cubrirle las espaldas, pero finalmente se vio forzada a entregarlo debido a la presión de Estados Unidos. Si Avilés no hubiera filtrado esa información, Benavides tal vez habría podido ser protegido por sus compañeros de armas. La información al respecto no ha sido muy clara, pero el principal responsable de ello ha sido la propia Fuerza Armada, cuyo sospechoso hermetismo sobre el caso no ha hecho sino favorecer las especulaciones que el presidente Cristiani solicitó no hacer. La complicidad de la Fuerza Armada con Benavides no concluye ahí. Las revelaciones difundidas recientemente por la prensa norteamericana sobre las comodidades que Benavides goza en su confinamiento revelan una férrea estructura de impunidad que ni siquiera Estados Unidos ha logrado dismantelar.<sup>36</sup>

No es cierto, pues, que el asesinato de los jesuitas sea un "hecho aislado" perpetrado por un puñado de efectivos que actuó autónomamente. Hubo una estructura institucional que hizo posible la masacre y ha habido una voluntad institucional de encubrir a los asesinos, al menos hasta donde las presiones norteamericanas lo permitan. Por

otra parte, la manera misma cómo la masacre fue ejecutada corrobora un modo rutinario de proceder, al cual la Fuerza Armada recurre cada vez que comete una tropelía cuyas consecuencias podrían acarrearle costos políticos de consideración. El fusil AK-47 con el cual fueron asesinados los padres Ellacuría, Martín-Baró y Segundo Montes, el simulacro de enfrentamiento con el FMLN en el campus de la UCA, etc., son elementos con los cuales los asesinos quisieron preparar una coartada en la eventualidad de que el hecho fuera investigado ulteriormente.<sup>37</sup> El mismo tipo de procedimiento empleó el ejército en 1982, en el caso de los periodistas holandeses cuyo asesinato intentó presentar como producto de un enfrentamiento con el FMLN; en el asesinato del teólogo suizo Jürg Weis;<sup>38</sup> en la masacre de San Sebastián,<sup>39</sup> etc. No se trata de conductas aisladas, sino de un estricto *modus operandi* de la Fuerza Armada. Tampoco se trata de un comportamiento que pertenezca al pasado. En el curso de los últimos cuatro meses, además de la masacre de la UCA, las masacres de Cuscatancingo<sup>40</sup> y de Guancorita<sup>41</sup> han presentado el mismo esquema operativo.

El caso de Guancorita es el más reciente. En la crónica de febrero, en esta misma edición de ECA, presentamos la descripción de los hechos. Aquí nos interesa más bien destacar, una vez más, cómo funciona la lógica castrense: el jefe del Estado Mayor, el comandante de la Fuerza Aérea (FAS) y el jefe del Destacamento Militar N° 1 negaron categóricamente que las naves hubieran roqueteado o bombardeado la repoblación. El propio presidente Cristiani asumió sin reservas la versión castrense. En el lugar de los hechos, a la vista de la hilera de casas roqueteadas, ante los familiares sobrevivientes y numerosos testigos presenciales, la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos todavía defendió la posibilidad de que los repobladores hubiesen muerto debido a las catapultas del FMLN. Finalmente, las evidencias se impusieron y la Comisión Investigadora no tuvo más remedio que admitir que los muertos y heridos fueron víctimas de un disparo de rocket de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Sin embargo, el Alto Mando ha declarado que no

aplicará ningún tipo de sanción al piloto que disparó el roquet, pese a que éste violó los instructivos de la Fuerza Aérea, los cuales prohíben abrir fuego sobre población civil aunque el FMLN se escuda en ella.

Tres masacres —las de la UCA, Cuscatancingo y Guancorita— en menos de un mes no pueden considerarse como hechos “aislados,” sobre todo cuando reproducen el mismo esquema operativo con el cual la Fuerza Armada ha funcionado rutinariamente en el pasado. Estas violaciones de los derechos humanos, que el gobierno y la Fuerza Armada consideran “esporádicas,” son tan frecuentes que no pueden atribuirse, sino a un modo sistemático de proceder. Uno de los elementos más graves de este *modus operandi*, tan grave como la materialidad misma de las violaciones, lo constituye la voluntad de encubrimiento con que la Fuerza Armada reacciona *a posteriori*. Esa voluntad de encubrimiento es tal que incluso se traduce frecuentemente en agresión contra quienes denuncian tales violaciones, como si la parte ofendida fuera la institución castrense y no la sociedad civil. El 21 de agosto pasado, ante denuncias de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado sobre el aumento de la represión, el Viceministro de Seguridad, coronel Inocente Orlando Montano, advirtió que “le vamos a poner paro a que cualquier hijo de vecino aparezca atacándonos y se quede impunemente tranquilo.”<sup>42</sup> En la misma oportunidad, el coronel Montano se refirió a los jesuitas de la UCA como “individuos plenamente identificados con los movimientos subversivos.”<sup>43</sup> Un mes más tarde, el director de la Policía Nacional, coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, declaró que “los cuerpos de seguridad actuarán desde hoy sin ninguna contemplación contra los vándalos, proteste quien proteste.”<sup>44</sup> Mientras persista esta voluntad de encubrimiento de la institución, los incidentes de violación de los derechos humanos por parte de la Fuerza Armada serán interminables.

#### 4.3. La depuración del ejército: fracaso de los esfuerzos norteamericanos

El problema del respeto a los derechos humanos en El Salvador deriva, en última instancia, de la estructura de impunidad del ejército para violarlos. Al cabo de diez años de esfuerzos norteamericanos para hacer que el ejército salvadoreño asimile la idea del respeto a los derechos humanos, los frutos han sido muy pobres.

Después de los sucesos de Guancorita, uno de los repatriados manifestaba: “cuando regresamos de Honduras pensamos que ya había acá un ejército diferente del de 1980, que fue cuando nos fuimos; pero ahora sabemos que es el mismo ejército, capaz de hacer las mismas masacres y los mismos asesinatos.”<sup>45</sup> Un sector cada vez más amplio del Congreso norteamericano comparte esta percepción. El 6 de febrero recién pasado, el senador John Kerry expresaba que “ya es hora de que entendamos que miles de millones de ayuda a El Salvador no han propiciado las reformas y la libertad que nos habían prometido, y peor aún, han creado un ejército que se niega a depurar a los elementos fuera de control; el ejército se ha convertido en una mafia que ha crecido más y se ha hecho más poderosa con nuestra ayuda.” Por su parte, el senador Edward Kennedy señaló que “pese a las denuncias sobre derechos humanos, a las amenazas de reducir la ayuda y a las constantes advertencias del gobierno de Estados Unidos, las atrocidades continúan.”<sup>46</sup>

Precisamente, éstas son las razones por las cuales el FMLN ha colocado la cuestión de la depuración de la Fuerza Armada como un tema central de su plataforma de negociación. El meollo del problema es muy claro: “el ejército sigue siendo el poder fundamental en el país y para que haya proceso democrático es necesario limitar su poder y limpiarlo de todos los asesinatos.”<sup>47</sup>

La demanda del FMLN incluye varios as-

**El problema del respeto a los derechos humanos en El Salvador deriva, en última instancia, de la estructura de impunidad del ejército para violarlos.**



pectos.<sup>46</sup> En primer lugar, está la depuración propiamente dicha del ejército, la cual consistiría en la expulsión y castigo de los elementos comprometidos en violaciones a los derechos humanos. Aparejado a ello, está el aspecto de su profesionalización, la cual no consistiría simplemente en un mejor adiestramiento técnico o en el empleo de recursos más sofisticados, sino también en la formación de un ejército nacional, políticamente no deliberante y subordinado al poder civil. Un tercer aspecto de la propuesta del FMLN se refiere a la separación entre el ejército propiamente dicho y los cuerpos de seguridad, los cuales deberían pasar bajo el mando civil del Ministerio del Interior. Finalmente, estaría el problema de adecuar el tamaño del ejército a las necesidades reales del país y a la capacidad de los recursos fiscales para mantenerlo. Ninguna de estas cuestiones debiera ser, en principio, irresoluble. En su oportunidad, tanto el anterior Ministro de Defensa, general Vides Casanova, como el actual, general Larios, se han manifestado dispuestos a estudiar la posible reducción del ejército, dependiendo de las necesidades del país<sup>49</sup>.

Quizá el punto que ofrece mayores dificultades se refiere al problema de la depuración *strictu sensu*, tomando en cuenta la considerable solidaridad gremial del estamento militar y la complicidad factual, directa e indirecta, de todos para con las acciones de cada uno. No obstante, incluso en este punto hay algunos antecedentes históricos relativamente recientes. Con ocasión del golpe militar del 15 de octubre de 1979, la juventud militar purgó a unos 40 oficiales. En 1984, al asumir la presidencia, el Ing. Duarte se valió del apoyo incondicional que en aquel momento le daba el gobierno de Reagan para remover a varios militares, a quienes se vinculaba con los escuadrones de la muerte.<sup>50</sup> Con ocasión de la consignación del coronel Benavides y demás oficiales implicados en la masacre de la UCA, incluso militares reputados de línea dura, como el coronel Francisco Elena Fuentes y el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, han manifestado que la Fuerza Armada no está dispuesta a transigir con abusos de poder por parte de ninguno de sus integrantes. El coronel Ochoa llegó a expresar que

“el ser militar no le da a uno licencia para matar.”<sup>51</sup> Estas afirmaciones son importantes, tomando en cuenta que la trayectoria del ejército salvadoreño exhibe, precisamente, una historia de impunidad para asesinar, pero no pasan de ser afirmaciones meramente retóricas, como lo muestra el desarrollo del proceso judicial en el caso de la UCA y como lo muestra la impunidad de que gozan los responsables de las masacres últimas de Cuscatancingo y Guancorita.

En cualquier caso, Estados Unidos tiene la última palabra sobre la viabilidad de una efectiva depuración-profesionalización del ejército salvadoreño. En el último año, ha habido dos momentos álgidos de choque entre Estados Unidos y la Fuerza Armada en relación a esta cuestión. El primero se generó en mayo-junio, a raíz del veto norteamericano a la nominación del ex comandante de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo, como Ministro de Defensa. El ala más dura del ejército y de ARENA respaldaba incondicionalmente la candidatura de Bustillo. El gobierno de Bush mantuvo, inflexible, su veto, y sugirió los nombres del coronel Ponce o del general Larios. Según versiones difundidas por la prensa norteamericana, la disputa llegó al borde de un enfrentamiento entre las unidades de Bustillo y los simpatizantes de Ponce, luego de que la Fuerza Aérea Salvadoreña suspendió el apoyo aéreo a la infantería.<sup>52</sup>

El segundo momento de fricciones se ha generado a raíz de las presiones ejercidas por Estados Unidos para esclarecer las responsabilidades materiales e intelectuales en el caso de la masacre de la UCA. Aparentemente, las presiones han sido considerables. El propio jefe del comando sur, general Maxwell Thurman, viajó a El Salvador a comienzos de diciembre —antes de apresarse a Noriega— para persuadir al Alto Mando castrense a colaborar en el esclarecimiento de la masacre. De acuerdo al *New York Times*, Thurman advirtió a los militares salvadoreños: “sólo hay una manera de resolver el asunto. Si algunos de sus hombres están implicados en la masacre, preséntenlos.”<sup>53</sup> Algunos días después, el Vice-ministro de Defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, visitó Washington, encabezando una de-

legación del gobierno salvadoreño. Según frase literal del *[Newsweek]*, los congresistas lo trataron "como mugre" (*like dirt*).<sup>54</sup>

Según la prensa norteamericana, los esfuerzos del gobierno de Bush para esclarecer los detalles de la masacre y determinar si ha habido algún tipo de encubrimiento de los asesinos por parte de la Fuerza Armada, han tensionado las relaciones entre el grupo de asesores y el ejército salvadoreño. Varios asesores se han quejado de que ya no tienen libre acceso a todas las dependencias de la Fuerza Armada. Una alta fuente militar comentó al *Washington Post* que "los asesores son vistos más como espías que como instructores. Hay una atmósfera muy mala."<sup>55</sup> Psicológicamente, tal situación es comprensible. La investigación de la masacre de la UCA sería el primer caso en el cual el Pentágono ha interpelado directamente a la Fuerza Armada en relación a su participación en un caso de violación a los derechos humanos. Hasta la fecha, el ejército salvadoreño había dispuesto virtualmente de un cheque en blanco para aplicar las medidas represivas que estimara necesarias para el éxito de la estrategia de contrainsurgencia.

Aun así, el éxito de los esfuerzos para determinar las responsabilidades y castigar a los asesinos de los jesuitas todavía es precario. El 14 de febrero recién pasado, la comisión de congresistas que monitorea el desarrollo de las investigaciones de la masacre dio un informe preliminar sobre los resultados de su gestión. La comisión estimó que la investigación del caso "se ha caracterizado por un buen trabajo policial de parte de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, y felicitamos al gobierno salvadoreño por ello. Los aspectos técnicos del caso han sido bien manejados. Sin embargo, creemos que la investigación aún no ha finalizado, y que todavía quedan por investigarse pistas y argumentos importantes, tales como informes que sugieren que los autores intelectuales de los asesinatos pueden no haber sido identificados y sugerencias que indican que pudo haber encubrimiento de parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas... Con respecto a la siguiente fase del proceso judicial, vemos con temor que la evi-



dencia disponible hasta este momento podría ser insuficiente para llevar a todos los asesinos ante la justicia." Más adelante, los congresistas se preguntaban, en relación a la situación general de los derechos humanos en el país, "con respecto a las Fuerzas Armadas, la interrogante principal que se hace este equipo es si los problemas de los derechos humanos en El Salvador, incluyendo el asesinato de los jesuitas, son el producto de acciones aisladas de un grupo de militares renegados, o si surgen de las actitudes y acciones que nos llevan a las entrañas del mismo ejército y otras instituciones importantes de este país. El reto más grande que encara El Salvador consiste en promover un cambio genuino en estas instituciones, ya que a pesar de las cantidades enormes de dinero y esfuerzo invertidos, todavía no ha sido logrado a cabalidad. Dada la tragedia del caso de los jesuitas, es sumamente importante que la Fuerza Armada como institución, pueda distinguir entre aquéllos que se levantan en armas contra el gobierno, y aquéllos cuyas convicciones políticas y religiosas los ponen en desacuerdo con el



gobierno."<sup>56</sup> Hasta la fecha, el ejército salvadoreño no ha sido capaz de establecer tal distinción.

##### 5. La coyuntura internacional: el efecto demostración de la "perestroika" y la derrota electoral del sandinismo

Con excepción, quizá, de la revolución bolchevique y de las dos guerras mundiales, la metamorfosis que la *perestroika* impulsa actualmente dentro del socialismo constituye el fenómeno histórico más relevante del siglo XX, aun cuando sus efectos definitivos sólo podrán ponderarse adecuadamente el próximo siglo.

En El Salvador, la mayoría de las fuerzas sociales y políticas sólo ha empezado a percatarse de los alcances de la *perestroika* a partir de la demolición del muro de Berlín, en noviembre pasado, y de las vertiginosas transformaciones que se han sucedido en los regímenes políticos de Europa oriental en los últimos cuatro meses.

Casi un año antes de que ocurrieran estos acontecimientos, el P. Ellacuría manifestaba ya que "los revolucionarios marxistas centroamericanos necesitan estudiar muy de cerca la *perestroika* y las nuevas posiciones del partido comunista soviético y del Kremlin. Varios síntomas muestran que ya lo están haciendo. Pero aún queda mucho más por hacer."<sup>57</sup> En el centenario de la muerte de Marx, cuatro años antes que Gorbachev publicara la *Perestroika*, la revista *ECA* dedicó ya un número monográfico a la desmitificación del marxismo.<sup>58</sup>

Las transformaciones políticas que se está operando en Europa oriental tampoco atraparon desprevenido al FMLN. De hecho, el FMLN había entrado en una fase de *aggiornamento* por lo menos un año antes de tales transformaciones. A comienzos de 1989, el comandante Villalobos afirmaba que "nuestros procesos revolucionarios se identifican con la *perestroika* en su lucha contra el dogmatismo y el pensamiento ortodoxo que pretende trasladar mecánicamente los modelos clásicos de la revolución y su estrategia a nuestro país. Esta discusión en el seno del pensamiento revolucionario latinoamericano es anterior a la *perestroika*."<sup>59</sup>

En la base de la apreciación de Villalobos subyacía, incluso, un esquema metodológico y categorial bien definido: "las características de las revoluciones son resultado histórico concreto de la realidad objetiva en la cual tuvieron que desarrollarse. Por ello, a cada proceso revolucionario le toca desarrollar sus propios conceptos y su propio modelo de revolución."<sup>60</sup> "Sería deshonesto y burdo negar la incidencia del marxismo y del leninismo en el FMLN... El FMLN acepta y entiende el marxismo-leninismo como disciplina científica para analizar la realidad y como teoría de organización para la lucha, pero sin convertirlo en dogma que nos aisle de nuestras realidades... El FMLN no discute sobre teoría o definiciones ideológicas, sino sobre la realidad."<sup>61</sup> "El FMLN no tiene un concepto dogmático de revolución o para ser más precisos, del socialismo, palabra que asusta tanto a quienes todo lo definen ideológicamente sin profundizar en la realidad. El objetivo estratégico de una revolución es resolver los problemas sociales y llevar a la sociedad a un desarrollo superior. No se trata de construir un esquema por construirlo."<sup>62</sup> "Sería absurdo y antihistórico aplicar un modelo cerrado de revolución en un mundo abierto y multipolar, porque bloquearía el propio desarrollo de la revolución y provocaría su aislamiento."<sup>63</sup>

Villalobos sacaba también las consecuencias prácticas de este planteamiento. Pensaba que, en el caso salvadoreño, la revolución sería inviable si no asumía una política realista de concertación con Estados Unidos y con la empresa privada: "de nada sirve una sociedad ideologizada si no resuelve la miseria. Para ello es fundamental que Estados Unidos entienda nuestros procesos y no los obligue a crear modelos de guerra."<sup>64</sup> La suerte corrida por el proceso revolucionario sandinista es un dramático contraejemplo de esta situación.

Asimismo, Villalobos ha aceptado que el proyecto revolucionario del FMLN debe asumir el carácter de una democracia política representativa y participativa. La vieja idea del partido único queda descartada: "no debe confundirse la unidad de las fuerzas revolucionarias en un solo partido con una sociedad con un solo partido. El modelo de partido único en el socialismo clásico es fruto



de una realidad histórica. Nuestra sociedad tiene otra complejidad y composición social."<sup>65</sup> En fin, "no es posible ni necesaria una revolución que se proponga eliminar totalmente la propiedad privada, contar con un solo partido, negar la existencia de otras fuerzas políticas, cerrar los medios de difusión a otras fuerzas, romper con la Iglesia, luchar contra la religión, dejar de hacer elecciones, firmar pactos militares con potencias que establezcan bases para armas sofisticadas, convencionales y muchísimo menos la ridícula idea de contar con armas atómicas en nuestro territorio. El FMLN define el proyecto revolucionario para El Salvador como una revolución abierta, flexible, pluralista y democrática en lo económico y político."<sup>66</sup>

La *perestroika*, pues, no tomó por sorpresa al FMLN. Con todo, el curso real de la metamorfosis que experimenta actualmente el socialismo no parece estar resultando demasiado favorable al movimiento revolucionario en El Salvador, al menos en el corto plazo.

En conjunto, la coyuntura internacional no es propicia para las soluciones violentas a los problemas socio-políticos. Desde luego, siempre hay excepciones. Occidente no puso en duda el derecho a la insurrección del pueblo rumano contra la dictadura de Ceausescu y seguramente apoyaría la independencia armada de las repúblicas bálticas que la URSS se anexó en la segunda guerra mundial. Por otro lado, irónicamente, el gobierno de Bush ha admitido la legitimidad del uso de la fuerza para resolver los conflictos interétnicos del Cáucaso. Empero, la tendencia es a privilegiar las soluciones políticas de los focos de conflictividad que aún persisten en el mundo.

En principio, tal clima de opinión internacional debería propiciar una solución negociada del conflicto en El Salvador, pero, de hecho, encierra algunos riesgos para el proceso de diálogo entre el gobierno de ARENA y el FMLN. La paradoja estriba en que, por un lado, la comunidad internacional tiende a impulsar la solución política de los conflictos, pero, por otro, su deslegitimación de las soluciones violentas se traduce normalmente, en la práctica, en la descalificación de los grupos armados contestatarios a los regímenes

legalmente constituidos, a no ser que éstos revistan el carácter de una dictadura como la de Ceausescu. Esa es, por ejemplo, la posición de la última cumbre de mandatarios centroamericanos, efectuada en San Isidro de Coronado en diciembre pasado.

La cumbre instó a la solución política del conflicto salvadoreño, pero a la vez deslegitimó al FMLN, lo cual, en las circunstancias de El Salvador, no deja de resultar una *contradictio in terminis*: se exhorta a las partes a negociar, pero a la vez se atribuye a una de ellas la razón. Tal como era previsible, el gobierno salvadoreño ha aprovechado la declaración de Coronado para atrincherarse inflexiblemente en su posición y plantear al FMLN un virtual *ultimatum* de rendición. Así, lejos de impulsarse los dinamis-mos de la negociación, se atizan, a final de cuentas, las llamas de la guerra.

La cumbre de Coronado inauguró una nueva fase del proceso centroamericano en la cual la correlación de fuerzas regional ha empezado a inclinarse visiblemente a favor del gobierno de Cristiani. A ello ha venido a sumarse la derrota electoral del sandinismo el 25 de febrero último.

Aún es prematuro determinar en qué medida esto afectará al FMLN. Mucho dependerá de la configuración que adopte el sistema político nicaragüense tras los forcejeos entre el FSLN y la UNO en relación a la transferencia del poder, pero, en cualquier caso, es previsible que el sandinismo no podrá seguir prestando al FMLN el apoyo logístico, material y moral que le ofrecía anteriormente. Probablemente, el FMLN tendrá que dismantelar las casas de seguridad y toda la infraestructura logística que mantenía en Nicaragua. Sus comunicaciones con el frente político-diplomático se verán considerablemente afectadas. Los eventuales flujos de armamento desde Nicaragua serán más difíciles. El gobierno salvadoreño, a partir de una vinculación mecánica entre la revolución nicaragüense y la guerrilla salvadoreña, ha reincidido en su vieja presunción de que los días del FMLN están contados.

## 6. Perspectivas de corto plazo

Al cabo de los primeros cien días de ARENA,

el P. Ellacuría se preguntaba si el presidente Cristiani podría llevar adelante su programa de moderación o si más bien su gestión sería sólo la fachada de un nuevo proceso de derechización en cuyo contexto se endurecerían aún más la guerra y la represión.<sup>67</sup>

A partir de noviembre, la tendencia que el P. Ellacuría llamaba "civilista" ha cedido terreno en ARENA ante los sectores militaristas y escuadronistas del partido. El propio presidente Bush ha reconocido que Cristiani no controla del todo a los militares.<sup>68</sup> La efectiva subordinación institucional de la Fuerza Armada al poder civil es todavía una quimera. El ala terrorista del ejército y de ARENA todavía dispone de un gran margen de autonomía. A la vista de los acontecimientos de los últimos cuatro meses, la interrogante principal que se plantea es si los efectos desastrosos que la contraofensiva gubernamental ha tenido sobre el sistema político han dejado en pie alguna posibilidad de reconstituir el proceso de relativa apertura democrática que estaba en curso en el país antes de noviembre.

Como es comprensible, los sectores de la oposición no están dispuestos a coonestar una democracia de fachada. En un artículo reciente publicado en el *New York Times*, Rubén Zamora ha advertido que "a menos que la situación cambie radicalmente, tendremos que cerrar la tienda y regresar al exilio."<sup>69</sup> También Ungo ha manifestado claramente que su regreso al país dependerá de que el gobierno les ofrezca garantías mínimas "y no con palabras, que las hemos oído muchas veces, sino con gestos, con hechos concretos, para no avalar una democracia ficticia y sangrienta." "Están pidiendo al FMLN —añadió— que se incorpore a la vida política y a nosotros nos sacan de ella violentamente."<sup>70</sup> Una vez más, el régimen orilla a la oposición hacia la montaña.

El FMLN está en capacidad de seguir presionando militarmente. Aunque la ofensiva probó, como tantas veces lo había advertido la UCA, que no estaban dadas las condiciones para una insurrección, no probó, sin embargo, que el FMLN estuviera al borde del colapso militar, como lo afirmaba la Fuerza Armada. Por ello, lo más razonable es volver por los fueros de la

negociación. Incluso el general Maxwell Thurman ha reconocido recientemente que, a pesar de su superioridad numérica de 10 a 1 sobre el FMLN, el ejército salvadoreño no está en capacidad para derrotarlo; de ahí también Thurman concluía que la manera más viable de resolver el conflicto es a través de la vía negociada.<sup>71</sup> Incluso el presidente Cristiani habría afirmado el 16 de febrero: "personalmente, pienso que una victoria militar es posible, pero llevaría mucho tiempo e implicaría muchos años más de destrucción y un mayor baño de sangre."<sup>72</sup>

No obstante, el principal factor de desgaste del gobierno de Cristiani no es la presión militar que el FMLN pueda ejercer, sino la crisis galopante de la economía, que las medidas de política económica de ARENA sólo han contribuido a exacerbar. El talón de Aquiles del régimen de Cristiani está en su gestión económica, y en el descontento social que ella está exacerbando. En este terreno, Cristiani puede aprender bastante de la experiencia electoral reciente de la región.

Los resultados de los procesos electorales llevados a cabo en el área en el último año —los triunfos de Cristiani, Endara, Callejas, Calderón Fournier y Violeta de Chamorro— no deben interpretarse como el triunfo de las derechas, sino de los opositores. Los electorados centroamericanos entienden poco de ideologías. No han votado a favor de las derechas, sino en contra del hambre, del desempleo, de la inflación y de la violencia. El electorado salvadoreño no es la excepción. Si ARENA persiste en la política económica que ha adoptado hasta el momento, y si esta política no le surte efecto en términos de estabilizar la situación económica, se verá sometida a un desgaste político análogo al que le permitió desplazar al Partido Demócrata Cristiano del poder y al que ha llevado a la bancarrota electoral al sandinismo. En este terreno, los dinamismos objetivos del proceso salvadoreño juegan claramente a favor del FMLN. Pero, a su vez, el FMLN debe recapacitar sobre sus radicalismos y maximalismos del pasado e impulsar un proceso organizativo de masas de nuevo cuño.<sup>73</sup>

Por de pronto, el principal obstáculo al cual se

enfrenta, no sólo la oposición, sino el sistema democrático mismo de El Salvador, lo constituye la incapacidad de la Fuerza Armada para "distinguir entre aquéllos que se levantan en armas contra el gobierno, y aquéllos cuyas convicciones políticas y religiosas los ponen en desacuerdo con el gobierno," para emplear las palabras arriba citadas del informe de los congresistas que monitorean el desarrollo del caso de la UCA.

Con ocasión del atentado contra FENAS-TRAS, el 31 de octubre pasado, el FMLN manifestó que dicho hecho obedecía "a la típica lógica de responder a operaciones militares guerrilleras con atentados y acciones de exterminio de la población civil no combatiente." Los excesos de la Fuerza Armada contra los sectores civiles de oposición durante la coyuntura de la ofensiva corroboraron dramáticamente esa apreciación. La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos lamentó que el gobierno salvadoreño pretextara la ofensiva guerrillera "para perseguir a líderes religiosos, políticos y dirigentes civiles no directamente involucrados en el conflicto armado." Mientras el gobierno y la Fuerza Armada continúan operando bajo esa "lógica" de considerar como objetivo militar cualquier sector de oposición civil que les parezca ser "fachada" del FMLN, la democracia no tendrá ninguna viabilidad en El Salvador.

#### Notas

1. Ver *Proceso 411*, y el informe de Americas Watch, *Carnage Again: Preliminary Report on Violations of the Laws of War By Both Sides in the November 1989 Offensive in El Salvador*, 24 de noviembre de 1989.
2. Ver Committee to Protect Journalists, *A Chronology of Attacks Against the Press in El Salvador. November 11- December 9, 1989*.
3. Ver *ECA*, 1989, 483-484.
4. "Joaquín Villalobos: Los puntos sobre las fes," *Pensamiento Propio*, 1989, 57, p. 16.
5. Villalobos, Joaquín, "Perspectivas de victoria y proyecto revolucionario," *ECA*, 1989, 483-484, p. 31.
6. *Pensamiento Propio*, p. 13.
7. Villalobos, *op. cit.*, p. 32.
8. *Pensamiento Propio*, p. 13.

9. Marta Hamecker, "La propuesta del FMLN: entrevista con Joaquín Villalobos," *ECA*, 1989, 485, p. 222.
10. *Ibid.*, p. 221.
11. *Ibid.*, p. 226.
12. *Ibid.*, p. 227.
13. Villalobos, *op. cit.*, p. 33.
14. Hamecker, *op. cit.*, pp. 214-215.
15. *Ibid.*, p. 216.
16. *Ibid.*, p. 227.
17. Ignacio Ellacuría, "Una nueva fase en el proceso salvadoreño," *ECA*, 1989, 485, p. 186.
18. Ver *Proceso 378*.
19. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), *La opinión de los salvadoreños sobre 1987*. Diciembre de 1987.
20. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), *Opinión del pueblo salvadoreño sobre la paz en El Salvador*. Agosto de 1988. Ignacio Martín-Baró, (1988), *Así piensan los salvadoreños urbanos (1986-1987)*, San Salvador: UCA Editores. Ignacio Martín-Baró (1989), *La opinión pública salvadoreña (1988-1989)*, San Salvador: UCA Editores.
21. Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), *La opinión de los salvadoreños sobre 1988*. Enero de 1989.
22. Ver Larry Rohter, "Salvador Rebel Chief Offers Truce if U.S. Halts Aid so Cristiani Government," *The New York Times*. 18 de septiembre de 1989.
23. Ver Jane Bussey, "Strategist: Salvadoran Rebels Blew Chance," *The Miami Herald*, 18 de septiembre de 1989.
24. Villalobos, *op. cit.*, p. 37.
25. Ver Marjorie Miller, "¿Did Senator's Meeting Lead to Murder of Salvadoran?," *The Miami Herald*, 27 de enero de 1990.
26. Villalobos, *op. cit.*, p. 33.
27. *Ibid.*, p. 35.
28. *Ibid.*, p. 34.
29. *Ibid.*, p. 33.
30. Ver el sugestivo artículo de Joel Millman, "El Salvador's Army. A Force Unto Itself," *The New York Times Magazine*, 10 de diciembre de 1989.
31. Ellacuría, *op. cit.*, pp. 187-188.
32. *Ibid.*, p. 188.
33. Ver Ana Arana, "Salvador Officers met before, after slayings," *The Miami Herald*, 5 de febrero de 1990. Douglas Farah, "U.S. Pressure in Jesuit Probe Said to Alienate Salvadoran Officers," *The Washington Post*, 6 de febrero de 1990.
34. Ver *Procesos 409 y 414*.



35. Ver Ana Arana, "American withheld data in priest case," *The Miami Herald*, 16 de enero de 1990. Robert Pear, "Salvador evidence escaped US envoy," *The New York Times*, 16 de enero de 1990.
36. Ver Douglas Farah, "Colonel Charged in Jesuit Killing Lives in Luxury," *The Washington Post*, 22 de febrero de 1990. Ana Arana, "Salvadoran Military Split Over Blame in Jesuit Case," *The Miami Herald*, 24 de febrero de 1990.
37. Ver *Proceso 414*.
38. "Los asesinos de Jürg Weis," *ECA*, 1988, 483-484.
39. "Masacre en San Sebastián," *ECA*, 1988, 480.
40. Ver *Proceso 417*.
41. Ver *Proceso 418-419*.
42. *El Mundo*, 21 de agosto de 1989, p. 5.
43. *El Diario de Hoy*, 22 de agosto de 1989.
44. *El Mundo*, 19 de septiembre de 1989, p. 1.
45. Ver Lindsey Gruson, "Homecoming is Tragic for Salvador Refugees," *The New York Times*, 15 de febrero de 1990.
46. Cable de EFE fechado en Washington el 6 de febrero de 1990.
47. Hamecker, *op. cit.*, p. 220.
48. Ver *Proceso 405*.
49. Ver *Proceso 402*.
50. Entre ellos se contaban los coroneles Nicolás Carranza y Mario Denis Morán. La prensa norteamericana ha informado que, después de la llegada de ARENA al ejecutivo, algunos de ellos han empezado a regresar al país.
51. *Diario Latino*, 11 de enero de 1990.
52. Ver Douglas Farah, "Salvadoran President-Elect Facing Stiff Challenges," *The Washington Post*, 28 de mayo de 1989. Douglas Grant Mine, "Conflict Over War Said to Split Salvador Military," *The Miami Herald*, 31 de mayo de 1989. No fue la primera mancha disciplinaria del general Bus-tillo. Siendo todavía coronel, en 1983, se in-subordinó contra el entonces Ministro de Defensa, general José Guillermo García.
53. Ver Robert Pear, "Outrage in U.S. Spurred Action in Jesuit," *The New York Times*, 21 de enero de 1990.
54. Ver Charles Lane, "An Act of Considerable Courage". El Salvador charges a colonel in the Jesuit killings," *Newsweek*, 29 de enero de 1990.
55. Ver Douglas Farah, "U.S. Pressure in Jesuit Probe Said to Alienate Salvadoran Officers," *The Washington Post*, 6 de febrero de 1990.
56. Informe presentado a la prensa por la comisión de congresistas.
57. Ignacio Ellacuría, "Nuevo orden mundial propuesto por Gorbachev," *ECA*, 1988, 481-482.
58. *ECA*, 1983, 421-422.
59. Villalobos, *op. cit.*, p. 42.
60. *Ibid.*, p. 36.
61. *Ibid.*, p. 37.
62. *Ibid.*, p. 48.
63. *Ibid.*, p. 41.
64. *Ibid.*, p. 45.
65. *Ibid.*, p. 46.
66. *Ibid.*, p. 49.
67. Ignacio Ellacuría, "Los cien primeros días del gobierno de ARENA," *ECA*, 1989, 490-491.
68. *Diario Latino*, 26 de enero de 1990, p. 13.
69. Rubén Zamora, "For Salvador, Democracy before Peace," *The New York Times*, 24 de enero de 1990.
70. Cable de ACAN EFE fechado en San Salvador, el 21 de enero de 1990.
71. Ver Michael Gordon, "U.S. General Says Salvador Cannot Defeat the Guerrillas," *The New York Times*, 9 de febrero de 1990.
72. *El Salvador On Line*, 19 de febrero de 1990.
73. Ver Ignacio Ellacuría, "La cuestión de las masas," *ECA*, 1987, 465.